



RESOLUCION No. RH- 5931 21 NOV. 2022

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,

en ejercicio de las facultades legales estatutarias previstas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, delegadas por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial mediante Resolución 1896 del 17 de agosto de 2022, y previos los siguientes

ANTECEDENTES

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la Resolución DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, determinó: *“ORDENESE el reintegro de la suma de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$23.453.902,00), por parte de EPS SURAMERICANA S.A. – EPS SURA, identificada con el NIT. 800088702, a través de su representante legal o quien haga sus veces, quien deberá consignar los dineros (...)”*.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali motivó la anterior decisión en: **(i)** el informe a Auditoría UA16-017, la Circular DEAJC16-79 del 28 de septiembre de 2016, y la deuda que se pudo establecer -a cargo de la EPS SURA -, una vez depurado el inventario de las incapacidades pendiente por cobrar, reconocer y pagar por parte de la mencionada EPS; **(ii)** el derecho de recobro de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 24 del Decreto 4023 de 2011 y dentro de las facultades otorgadas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, habiendo realizado los trámites de solicitud del pago dentro del término legal establecido ante la EPS; **(iii)** la ausencia de respuesta a los requerimientos que se han realizado por oficio a la EPS haciendo el cobro de las incapacidades que están a su cargo, los cuales están relacionados en el folio 3 de la Resolución DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022.

Que el anterior acto administrativo fue notificado por correo electrónico el 16 de febrero 2022, y dentro del término legal, por intermedio del representante legal judicial, doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 19.395.114 de Bogotá y tarjeta profesional n° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con escrito del 2 de marzo de 2022, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, y solicita: *“Revoque y reponga en su totalidad la Resolución recurrida citada por no contar con la competencia para emitir este tipo de decisiones, y por no existir fundamentos suficientes desde el punto de vista financiero, jurídico y fáctico para tales efectos, por estar en manifiesta oposición a la Constitución Política y a la ley, por no estar conforme al interés público o social y porque con el mismo se está causando un agravio injustificado a la persona que represento. 2. Si la decisión no fuere revocada, interponemos mediante el presente escrito igualmente, RECURSO DE APELACIÓN (...)”*, su inconformidad radica en que:

- En el listado de las incapacidades a recobrar se relacionan unas que ya fueron pagadas, otras que no se encuentran en el sistema de información por falta de recobro o por no

- haber sido generadas por la EPS o que son superiores a 180 días;
- Falta de legitimación y competencia –Violación de la Ley sustancial. Refiere que en virtud a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no es una entidad administradora del régimen de seguridad social y por ende no tiene competencia, igual conclusión arguye frente a lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996;
 - Integración ilegal del acto administrativo. Argumenta que el acto administrativo “es contrario a la Constitución Política y a la Ley 100 de 1993, plantear presuntos compromisos o deberes que no son obligaciones, que no se tienen discriminados, a favor de entidades que no son las competentes para solicitar el recaudo de dineros de la Seguridad Social por vía de acto administrativo”;
 - Inexistencia de fuente sustancial de obligaciones económicas.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, a través de la Resolución DESAJCLR22-2806 del 21 de septiembre de 2022 resolvió: *“Reponer parcialmente el artículo 1 del acto administrativo contenido en la Resolución N° DESAJCLR22-146 de 16 de febrero de 2022 “Por medio de la cual se ordena un reintegro” contra EPS SURAMERICANA S.A. – EPS SURA, identificada con NIT No. 800088702, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y en su lugar, establecer que el cobro de las incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, a favor de la Nación- RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE, por la vigencia 2020, es por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.914.045,00), (...)”* y concedió la apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali fundamenta la decisión tomada en el recurso de reposición en lo siguiente:

- En el análisis de los artículos 206 de la Ley 100 de 1993, 24 del Decreto 4023 de 2011, 121 del Decreto – Ley 019 de 2012, normativa que regula el trámite para el recobro de los auxilios económicos derivado de las incapacidades o licencias otorgadas por la EPS y que por reglamentación legal le corresponde al sistema asumir la carga prestacional.
- En la obligación que le asiste de recobrar los dineros que pertenecen al Estado y por esta calidad deben ser reintegrados a la DTN, que de no realizar la gestión genera un detrimento fiscal conforme a lo dispuesto en la Ley de presupuesto, en especial lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
- En que realizó la gestión de cobro dentro del término legal establecido y después de realizar una depuración de la relación de las incapacidades frente a lo argumentado por la EPS en el escrito de sustentación del recurso, descontó algunas de las incapacidades por ser mayores a los 180 días continuos, valor que ascendió a la suma de \$8.539.857, quedando un saldo de \$14.914.045.

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali mediante escrito DESAJCLO22-3566 del 26 de septiembre de 2022 trasladó el cuaderno administrativo por el sistema de gestión de correspondencia y archivo de documentos oficiales -SIGOBius ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para resolver en la alzada.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez estudiado el expediente a la luz de la normatividad jurídica, en especial lo señalado en las Leyes 6 de 1992, 100 de 1993, 270 de 1996, 1437 de 2011 y 1438 de 2011; el Decreto Ley 019 de 2012; los Decretos 4023 de 2011 y 780 del 2016 sustituido por el Decreto 1427 de 2022; y la Circular Externa 026 del 26 de noviembre de 2015 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y analizados los argumentos aportados por la impugnante y la primera instancia, este despacho se permite señalar:

En la Rama Judicial la ordenación del gasto y la función pagadora se encuentran desconcentradas en virtud de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Es así como, el recobro de las prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral, como la que nos ocupa, le corresponde en primera instancia a la seccional de Cali, en aras de salvaguardar sus derechos al debido proceso, el de contradicción y el principio de la doble instancia.

Para efectos de resolver el recurso interpuesto contra la Resolución DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, se procedió a requerir a la Seccional de Administración Judicial de Cali para que remitieran las copias de piezas documentales necesarias para desatar en la alzada el presente asunto, tales como la relación de las incapacidades, y que indicará si a la fecha la EPS realizó algún pago con posterioridad a la emisión del acto administrativo impugnado.

Frente a la respuesta, la dependencia de Talento Humano de la Seccional de Cali remitió vía correo electrónico del 20 de octubre de 2022, la información requerida e indica que la EPS realizó el pago de la incapacidad otorgada a la servidora Daniela Escobar Escobar, por el período comprendido entre el 28 de enero y el 6 de febrero de 2020, por valor de 1.422.207, el 23 de septiembre hogaño, es decir, con posterioridad a la fecha de haberse resuelto el recurso de reposición, por lo que la deuda a la fecha es de trece millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho pesos ML (\$ 13.491.838).

Como presupuesto previo, es pertinente hacer mención que el auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, a sus afiliados cotizantes, por todo el tiempo que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual, conforme a lo preceptuado en los artículos 18 del Decreto-Ley 3135 de 1968, 206 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015, el último precepto legal que a letra reza:

“Artículo 2.2.5.5.13 Prestaciones económicas derivadas de las licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad. Durante la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula, las cuales estarán a cargo de la entidad de seguridad social competente.

Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se remunerará de conformidad con las normas de Seguridad Social en Salud” (Subraya propia).

Se resalta de la norma transcrita que, a partir del tercer día el pago del auxilio económico por enfermedad de origen común, se realiza a razón de las dos terceras partes (66.66%) por los primeros noventa días y la mitad por los otros noventa y **que dicha prestación económica debe ser reconocida por la EPS a la cual se encuentra afiliado el servidor judicial al momento de otorgarle la incapacidad, independiente de la naturaleza jurídica de la entidad de salud.**

Respecto del procedimiento para el reconocimiento de las incapacidades, el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que el empleador es el encargado de adelantar de manera directa ante las EPS.

A su vez, el artículo 2.2.3.1. del Decreto 780 del 2016 que compiló lo normado por el Decreto 4023 de 2011 el cual prevé que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deberán efectuar los reintegros de las prestaciones económicas por concepto de incapacidades y licencias de maternidad y de paternidad a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS, norma sustituida en su momento por el artículo 3 del Decreto 1333 de 2018, en la actualidad por el artículo 1 del Decreto 1427 de 2022.

En aplicación a la norma transcrita acorde con la previsión contenida en el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, el cual establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas, hecho que se evidencia se adelantó dentro del término determinado.

Entonces, es claro que la Dirección Seccional de Administración Judicial está facultada para adelantar el cobro de las incapacidades que canceló por nómina a los servidores judiciales que allegaron los certificados médicos que les otorgaba una incapacidad, licencia de maternidad o paternidad, y que se encontraban o están afiliados a EPS SURA de conformidad con la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, y que la responsable de la prestación económica es la Entidad Prestadora de Salud, En este caso la EPS SURA.

Frente a la competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales para efectuar el cobro por el procedimiento de cobro coactivo, los artículos 112 y 136 de la Ley 6° de 1992 establecen que las entidades públicas del orden nacional y en particular la **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, están facultadas para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y el de la Nación.

Ahora bien, se precisa resaltar que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé sobre el deber que les asiste a las entidades públicas para recaudar las obligaciones creadas a su favor, **con soporte en documentos que presten mérito ejecutivo**, estos son, en los que conste la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.

Conforme a lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011¹, las resoluciones que ordenen el pago, independiente del origen de la obligación, siempre y cuando se encuentre ejecutoriadas son exigibles por el procedimiento administrativo de cobro coactivo y gozan de presunción de legalidad mientras la jurisdicción Contenciosa Administrativa no se hubiere pronunciado al respecto².

Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, dispuso:

*"La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. **El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz.** De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.*

"(...) el acto administrativo tiene carácter ejecutivo, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir" (negrillas fuera de texto).

De lo anterior, se concluye que los actos administrativos contentivos de obligaciones a favor del Nación – Rama Judicial son exigibles a partir de su notificación al deudor y agotado el trámite en reclamación administrativa; vencido el término otorgado para el pago sin que se hubiere realizado, se traslada a la dependencia de cobro coactivo con el fin de hacer efectivo el derecho que en ellos se consagra.

En relación a la competencia que le asiste a la Seccional, el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 establece:

"Artículo 103. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:

- 1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.*
 - 2. **Administrar los bienes** y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.*
 - 3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.*
- (...)" (Negrillas y subrayas fuera de texto).*

De otra parte, la Circular Externa 026 del 26 de noviembre de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispone:

"... aquellos recursos derivados de las incapacidades que las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud y de Riesgos Profesionales reconocen y que deben ser reintegrados a la

¹ "Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley"

² Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dirección del Tesoro nacional toda vez que se trata de dineros que pertenecen a la Nación...”
(Subrayas fuera de texto).

Por las anteriores razones, es claro que le asiste a la Rama Judicial, como empleador cotizante y de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas legales antes transcritas, el deber de recobrar a la EPS SURA las prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencia de maternidad, que efectuó sin ser de su cargo, para que así, no haya apropiación de recursos para la salud sin justa causa.

Como se ha expuesto, la entidad adoptó como procedimiento idóneo para obtener el reintegro de estas prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud acudir al cobro por vía coactiva, cuando no se obtenga en el trámite administrativo y cobro persuasivo, en razón a que los dineros a recobrar son de carácter público, máxime cuando están dirigidos a preservar y cuidar los dineros públicos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Adicional, que como se dijo en precedencia, **el acto administrativo que ordena el recobro una vez ejecutoriado y en firme constituye un título ejecutivo, goza de presunción de legalidad y principio de obligatoriedad**, lo cual constituye razón legal suficiente para rechazar los argumentos que sustentan el recurso contra la resolución impugnada.

Del análisis de los documentos que hacen parte del cuaderno administrativo del expediente objeto de pronunciamiento, aportados por la Seccional de Cali, se evidencia que se adelantaron, ante la EPS SURA, los trámites administrativos necesarios para el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 2943 de 2013, artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016, cuyo resultado ha sido desfavorable. Ante esta situación, la Seccional de Cali emitió la resolución impugnada, documento que contiene las incapacidades recobradas, el periodo al que corresponde y los afiliados a los que les fueron otorgados.

De lo anterior, se desprende que al haberse surtido el trámite administrativo del recobro de las incapacidades y haberse comunicado los oficios a la EPS, dicha entidad es conocedora de las obligaciones que por ley debe cumplir.

De otra parte, como producto del análisis de la información que conforma el cuaderno administrativo, así como de las respuestas remitida por la dependencia de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional Cali, en la cual adjunta, un archivo en Excel contentivo de la relación de las incapacidades depuradas con los datos de nómina y el archivo físico de la seccional, se establece que la primera instancia al resolver el recurso de reposición depuró el valor establecido en el acto administrativo recurrido y determinó que el monto de la obligación adeudada por la EPS era inferior, tal como lo plasmó en la Resolución DESAJCLR22-2806 del 21 de septiembre de 2022.

Así las cosas y en atención que a la fecha EPS SURA no ha efectuado un pago adicional de las incapacidades objeto de cobro, conforme a la información suministrada por la Dirección Seccional de Cali, dicha EPS tiene a la fecha pendiente por pagar la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$13.491.838), por concepto de saldos adeudados e incapacidades no

canceladas, las cuales se detallan a continuación y se hacen las observaciones correspondientes:

Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Incap.	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor incapacidad	Valor Pagado	Saldo Pendiente	Observación con fundamento en la información remitida por la seccional
67007816	Camacho Calero	Zulay	IGE	28/05/2020	6/06/2020	1.833.221		1.833.221	Incapacidad radicada el 04/06/2020 y reiterada el 19/09/2022.
1144050918	Escobar Escobar	Daniela	LMA	12/03/2020	15/07/2020	25.121.124	24.738.819	382.305	Saldo adeudado por cálculo con el IBC que no corresponde al reportado por la Seccional.
38867493	Nieto Jaramillo	María Verónica	IGE	10/03/2020	29/03/2020	4.418.057		4.418.057	La incapacidad fue radicada el 16/06/2020 y reiterada el 19/09/2022.
48600534	Llantén Salazar	Nelsy	IGE	16/02/2020	25/02/2020	1.046.666		1.046.666	La incapacidad fue radicada el 24/02/2020 y se reitera el 19/09/2022.
1143880085	Toro Rincón	Laura Tatiana	IGE	16/02/2020	23/02/2020	281.965		281.965	La incapacidad fue radicada el 05/03/2020.
1144041818	Uribe Morales	Sandra Patricia	IGE	14/02/2020	20/02/2020	482.247		482.247	La incapacidad fue radicada el 05/03/2020 y se reitera 19/09/2022.
1144050918	Escobar Escobar	Daniela	IGE	12/02/2020	25/02/2020	2.488.863		2.488.863	La incapacidad fue radicada el 18/02/2020 y se reitera el 19/09/2022.
38867493	Nieto Jaramillo	María Verónica	IGE	9/02/2020	9/03/2020	7.573.811	6.081.520	1.492.291	Saldo adeudado por cálculo con el IBC que no corresponde al reportado por la Seccional. La incapacidad se debió liquidar IBC \$11.360.718.
16705055	Rodriguez Salcedo	Jose Reinaldo	IGE	22/01/2020	24/01/2020	335.048		335.048	La incapacidad fue radicada el 29/01/2020 y se reitera el 19/09/2022.
16289160	Miranda Mosquera	Diego	IGE	20/01/2020	21/01/2020	172.762		172.762	La incapacidad otorgada corresponde a un prorroga, es decir que le corresponde a la EPS asumir la prestación económica.
16705055	Rodriguez Salcedo	Jose Reinaldo	IGE	15/01/2020	21/01/2020	558.413		558.413	Se adjunta incapacidad Radicada el 15/01/2020 y se reitera el 19/09/2022.
						44.312.177	30.820.339	13.491.838	

Así las cosas, en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 345 y 352 de la Constitución Política y conforme al ordenamiento legal antes detallado, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus seccionales les asiste la obligación, como ordenadoras del gasto y responsables de la correcta ejecución del presupuesto de la Rama Judicial, el cobro derivados de incapacidades, licencias de maternidad o paternidad ya que al proceder de otra manera se estaría omitiendo un deber legal.

Con lo expuesto, se desvirtúan los argumentos esgrimidos por la apelante, sin embargo al evidenciarse que la EPS SURA efectuó el pago de una de las incapacidades objeto de cobro, este despacho procederá a revocar parcialmente los actos administrativos objeto de impugnación, en el sentido de establecer que EPS SURA debe pagar la suma de trece millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho pesos ml (\$13.491.838) a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en la cuenta destinada para el recaudo de dicha obligación, la cual será suministrada en la diligencia de notificación de esta resolución.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar parcialmente las Resoluciones DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022 y DESAJCLR22-2806 del 21 de septiembre de 2022, expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en el sentido de establecer que la deuda real a pagar por parte de la EPS SURAMERICANA S.A. sigla EPS SURA con Nit 800088702-2, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, es por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML (\$13.491.838) por el cobro derivado de incapacidades, licencias de maternidad o paternidad otorgadas a los servidores judiciales afiliados a dicha EPS, durante el periodo comprendido entre el enero y diciembre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a EPS SURAMERICANA S.A. - EPS SURA efectuar el pago de la obligación contenida en el anterior artículo, dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria. Se advierte que, de no allegar la constancia de pago dentro del término otorgado, se trasladará a la dependencia de cobro coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para que inicie el proceso de cobro por el procedimiento coactivo, y se liquidarán los respectivos intereses moratorios.

ARTICULO TERCERO. Reconocer personería jurídica al doctor Gustavo Alberto Herrera Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 19.395.114 de Bogotá y tarjeta profesional n°39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder otorgado.

ARTICULO CUARTO. Notifíquese la presente resolución a EPS SURAMERICANA S.A. - EPS SURA en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, indicándole que contra esta no procede recurso alguno y así queda agotado el trámite administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. Comisionese a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para que efectúe la notificación y para tal efecto envíese el expediente con los antecedentes administrativos, en archivo PDF, y una vez surtido dicho trámite disponga la devolución de la constancia de la notificación a esta Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.,



NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA

Elaboró: Claudia Alexandra Briceño Mejía – Profesional Universitario
Revisó: Raúl Silva Marta – Director Administrativo División de Bienestar y Seguridad Social